

Militarización Revolucionaria En Buenos Aires, 1806-1815*

Tulio Halperin Donghi

* Tulio Halperin Donghi: "Revolutionary Militarization in Buenos Aires, 1806-1815". *Past and Present*, N° 40, Oxford, julio de 1968.

En los diez años subsiguientes a 1806, Buenos Aires, capital del Virreinato desde 1776, rechazó dos invasiones inglesas y se convirtió en la capital de un país independiente, pero profundamente dividido. Esto es resultado de un esfuerzo complejo cuyos aspectos militares no son los menos importantes. Los cuarenta mil habitantes de la ciudad que habían expulsado a los ingleses por primera vez en 1806 organizaron una milicia urbana que contó con siete mil hombres y de los cuales estaban en servicio activo tres mil, poco antes de la revolución de 1810. En ese momento el peligro exterior había sido eliminado casi completamente debido a la reversión de alianzas que siguió al derrocamiento de la dinastía borbónica en España por la Francia imperial.

Aún antes de que se iniciaran las Guerras de la Independencia, este gran contingente militar, reorganizado después de 1807 en forma muy similar a la del ejército español regular, ya se había constituido en parte estable del sistema militar en el Río de la Plata y planteaba problemas financieros y políticos de cierta urgencia a las autoridades del Virreinato. Si bien las guerras revolucionarias impusieron cambios profundos en las funciones, organización y composición social del ejército, este tuvo un papel destacado en el Estado revolucionario. Así, pues, el proceso comenzado en 1806 gana impulso después de 1810. Durante los primeros cinco años de la Revolución los militares estuvieron en camino de convertirse en el primer estamento de la nueva nación. Aún después de 1816, cuando la cúpula revolucionaria usó el descontento provocado por la dilatada guerra para limitar el poder de los oficiales, el mismo hecho de que la guerra no se había terminado eliminó la posibilidad de revertir la tendencia hacia la militarización, comenzada diez años antes. La propuesta de los jefes revolucionarios de lograr una victoria rápida por medio de una mayor escalada bélica reafirma sin duda la prioridad que el movimiento revolucionario dio a las metas estratégicas en 1810. Si bien esta decisión era inevitable, acotó en gran medida los efectos políticos de la hostilidad debida al surgimiento de los militares, opinión que después de 1816 el gobierno compartía sinceramente con grandes sectores de la ciudadanía porteña.

La emergencia de los militares es tanto más sorprendente si se considera el rechazo general de una carrera en el ejército entre la joven generación de la elite porteña antes de 1806 y que consta en casi todos los informes respectivos. "Los hijos de Buenos Aires nunca han sentido atracción por la carrera militar; han preferido más bien ser abogados" —dice Mariquita Sánchez en sus recuerdos de los tiempos de la Colonia, y casi todos sus contemporáneos parecen estar de acuerdo con esta admirable dama.¹ Cabe preguntarse si estos contemporáneos, impresionados por los profundos cambios que comenzaron precisamente en 1806, no habrán exagerado inconscientemente el contraste con actitudes anteriores. Es cierto que los acontecimientos de 1806 (la conquista de Buenos Aires por menos de dos mil soldados ingleses que ocuparon la ciudad durante un mes) señalaron las deficiencias de la organización militar española en el Río de la Plata. Sin embargo, cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata en 1776, se tuvo en cuenta

su función como baluarte contra el poder portugués y en consecuencia se aumentaron considerablemente las fuerzas militares: se crearon nuevos regimientos y se enviaron desde la metrópolis apreciable número de oficiales de carrera a esta área fronteriza amenazada. Si bien los éxitos iniciales (los portugueses abandonaron en 1777 Colonia del Sacramento, que había sido su base militar en el Río de la Plata) permitieron un rápido deterioro del sistema de defensa, los oficiales del ejército profesional se ganaron el reconocimiento de su posición como sector bien establecido en la sociedad urbana hacia 1806.

Este hecho fue un aspecto menor en los grandes cambios de equilibrio del poder social y del prestigio en Buenos Aires, cambios producidos por las reformas administrativas de los Borbones y la expansión del comercio. En una ciudad como Buenos Aires, en rápido crecimiento hacia fines del siglo XVIII, los militares profesionales fueron un sector de la burocracia imperial que compartió el poder político con un nuevo grupo de comerciantes deseosos de lucrar con la expansión del comercio dentro del Imperio. El lugar que ocupaban los oficiales en esta elite social era secundario y de un aislamiento relativo, como puede juzgarse a través de frecuentes casamientos entre familias de militares² y el carácter casi hereditario del rango militar (hecho que fue denunciado después de la Revolución como un privilegio improcedente). Esto último puede haber también servido para atraer a nuevos postulantes hacia una profesión poco prestigiada.

Sin embargo, hubo excepciones a este marginamiento social relativo: en las áreas rurales los militares tuvieron un acceso más fácil a las elites locales por medio de los casamientos y de la apropiación de tierras.³ No obstante, la sociedad rural en su conjunto tuvo poco poder político local en la época prerrevolucionaria en la Argentina, al menos en el Litoral. Por otra parte, algunos regimientos aristocráticos eran considerados como carreras honorables aun por la juventud de las mejores familias locales. Tal el caso de la Guardia de Corps dedicada al servicio personal del Rey y a la Marina Real. En todo caso, los oficiales profesionales no encontraron un lugar indisputado en la elite local y en este sentido su posición es similar a la de aquel sector de la clase media urbana cuyo status social era cuestionable: 1) por sus tedios económicos limitados a una época en que la expansión económica abría nuevas compuertas a la prosperidad de pequeños comerciantes y artesanos situados más bajo en la escala del prestigio social. 2) Más importante aún: por la dualidad de los valores sociales corrientes que reconocía a la vez criterios formales por los cuales los militares tenían un derecho indiscutible a ocupar un lugar en la clase gobernante y criterios informales donde esto no quedaba tan claro.

Después de 1806 se acentuó la posición ambigua de los oficiales en la sociedad porteña ya que su ascenso como oficiales dentro de la milicia urbana se consideró como prueba del nuevo espíritu igualitario que dominaba la ciudad. No se los consideraba socialmente iguales a los ricos comerciantes con quienes compartían el liderazgo de los nuevos regimientos. El súbito crecimiento de la milicia, que daba a la mayor parte del control sobre los grupos armados locales a dirigentes sin formación militar fue sólo uno de los aspectos provocados por los cambios debidos a la reconquista de la ciudad en agosto de 1806. Si bien las tropas regulares puestas a disposición por el Gobernador de Montevideo jugaron un rol importante en la lucha, la contribución de la población local resultó también muy significativa. Más importante aún fue que la iniciativa partió espontáneamente de un émigré francés, Jacques de Liniers, cuya valiente acción contrastó con la apresurada retirada del Virrey Sobremonte a Córdoba y la aceptación masiva del dominio inglés

por parte de los funcionarios del gobierno, las corporaciones seculares y las religiosas. Todo el complejo administrativo y militar del régimen colonial había fallado; sólo la iniciativa local espontánea podía salvar a Buenos Aires para el rey contra un nuevo ataque de los ingleses. Esta era la sensación que tenía el pueblo, compartida totalmente por el Cabildo. El cuerpo municipal, renovado todos los años por cooptación y controlado severamente por un pequeño grupo de comerciantes de origen hispano, tenía sus propias ambiciones políticas, limitadas hasta 1806 por el Virrey y la Audiencia.⁴ El cabildo daba una asistencia financiera limitada y un apoyo institucional muy necesario a esta tendencia a la militarización. Pero la tendencia misma constituía parte de una percepción pública latente en la ciudad que de pronto eclosionaba. Los comerciantes ricos, los funcionarios del gobierno, los tenderos y los artesanos se precipitaron a la milicia creada bajo las órdenes de Liniers. El héroe de la Reconquista organizó las unidades más grandes (las de infantería urbana) con elementos regionales: dos de ellas compuestas por patricios (nativos de la intendencia de Buenos Aires), una de arribeños (los nacidos en el interior de las provincias del Virreinato), una de negros libres, mulatos e indios y una cada una de catalanes, vascos, gallegos, cantábricos y andaluces. Se esperaba de esta manera crear una "competencia entusiasta" entre los defensores del honor militar de sus respectivas provincias, lo cual a su vez aumentaba el espíritu de combate de la ciudad amenazada. La emulación tuvo sus consecuencias inesperadas; las unidades de la milicia regional comenzaron a superarse unas a otras con la magnificencia de sus nuevos uniformes. No sólo los oficiales sino hasta "cien soldados de lujo se vistieron por su propia cuenta" con "uniformes" de los cuales cualquier oficial francés se hubiese sentido orgulloso, mientras que los reclutas más pobres se vestían menos ostentosamente pero con decoro gracias a "la liberalidad de las personas pudientes".⁵ Así es como la riqueza, elemento informal pero no carente de importancia en la diferenciación social de Buenos Aires, se constituye en factor decisivo de la creación de un nuevo cuerpo de oficiales en 1806. Su influencia se hizo sentir tanto más por la informalidad de todo el procedimiento. Los nuevos soldados se reunían en asamblea para elegir a sus futuros comandantes. Sólo después que la elección era aprobada por Liniers se procedía al reclutamiento formal, organización militar de los tercios o batallones y la elección de los oficiales menores. En consecuencia, los votantes de la primera elección no necesariamente se enrolaban bajo las órdenes del oficial que habían elegido: en el tercio de gallegos, un tercio de los votantes no apareció más después de la asamblea preliminar.⁶ En otros casos (parecería que en el de patricios), la asamblea en la cual se votó al comandante sólo incluyó una fracción de los hombres que luego se incorporaron al regimiento.

La milicia estaba compuesta en primera instancia por unidades voluntarias y hasta varios meses después de organizada vio se utilizó el método compulsivo contra los recalcitrantes. La influencia personal de los organizadores era fundamental, y la elección de oficiales en muchos casos una mera formalidad. Sin embargo, la generosidad en la provisión de armas y uniformes no daba acceso automáticamente al cuerpo de oficiales. Se buscaba una experiencia militar previa y la elección de sus oficiales por la tropa dio una oportunidad de progreso a aquellos que, no teniendo fortuna, ni formación militar, tenían prestigio entre los demás milicianos. Las elecciones de la tropa eran revisadas prolijamente por los organizadores de la gestión hacia la militarización, y la emergencia de líderes sobre la base de su popularidad más que de cualquier otra virtud objetiva, no era vista con mucho beneplácito. Manuel Belgrano, por entonces secretario del consulado de comercio, nos dice que durante las elecciones entre patricios comenzó "a ver las tramas de los hombres de nada para elevarse sobre los de verdadero mérito" y

"... a no haber tomado por mí mismo la recepción de votos (agrega sin reticencia Belgrano) acaso salen dos hombres oscuros, más por sus vicios que por otra cosa a ponerse a la cabeza del cuerpo... recayó al fin la elección en dos hombres que eran de algún viso y aún ésta tuvo sus contrastes que fue preciso vencerlos, reuniendo de nuevo las gentes a la presencia del General Liniers quien recorriendo las filas conmigo oyó por aclamación los nombres de los expresados, y en consecuencia quedaron con los cargos".⁷

No es difícil comprender por qué los resultados de elecciones tan severamente controladas desde arriba estuviesen menos enfrentados con las jerarquías sociales existentes de lo que informes posteriores han debido admitir. Pero, si bien el número bastante limitado de "advenedizos sociales" entre los nuevos oficiales no justifica el tono alarmado de algunos informes⁸, la creación de sus milicias cambió irreversiblemente el equilibrio de poner en Buenos Aires de varias maneras. Antes que alentar la igualdad entre la elite urbana y las clases populares, la militarización impuso una nueva igualdad dentro de la elite misma. En especial, los criollos ganaron status como resultado de su superioridad numérica en las. Ejemplo de ello es la carrera de Cornelio de Saavedra, comerciante que surgió como líder militar de los patricios. Saavedra estaba muy lejos de ser un advenedizo social, si bien después de 1810 los enemigos de su política moderada lo presentaron como tal.⁹ Siguiendo las huellas de su padre, había sido miembro del Cabildo (distinción poco usual para un criollo) pero el reconocimiento formal de la pequeña clique de peninsulares ricos que controlaba la municipalidad le había concedido muy poco poder real. Sin embargo, en los inestables años después de 1806, Saavedra llegó a comandar la unidad armada más grande de Buenos Aires por lo cual su apoyo resultaba esencial para cualquiera que quisiese gobernar el Virreinato.

Las ventajas de la militarización para la elite criolla se acrecentaron por la posición social de numerosos criollos que estaban fuera de la elite urbana. Las grandes tiendas eran controladas por peninsulares que buscaban empleados entre gente de su propia región, con frecuencia en ramas de la familia que habían quedado en España. También el comercio menor estaba en manos de peninsulares menos prósperos; los artesanos sufrían la competencia del trabajo de los esclavos (un tercio de la población de Buenos Aires era negra y un 90% de los negros eran esclavos).¹⁰ No resulta sorprendente pues que, cuando los cuerpos de milicia fueron organizados más profesionalmente a principios de 1807, sólo las unidades criollas sufrieran esta transformación tan necesaria, mientras que los peninsulares se atuvieron a la vieja disciplina, entrenándose sólo en días feriados. En tanto que la mayoría de los soldados en las unidades criollas estaban dispuestos a renunciar a sus actividades no muy rentables en tiempos de paz para recibir la paga mensual de soldado que ascendía a 12 pesos, los empleados de hacienda, los funcionarios menores del gobierno y los comerciantes, que predominaban en las filas de las unidades peninsulares, no quisieron ni considerar dicho cambio.

Las consecuencias de la distinta organización militar entre criollos y españoles no se hizo evidente de inmediato. En junio de 1807, la Defensa exitosa contra una fuerza expedicionaria británica más imponente que ya había conquistado Montevideo, era todavía una actividad conjunta entre Liniers y el Cabildo. Si bien el héroe de la Reconquista no ganó nuevos laureles en la Defensa y fue más bien Martín de Alzaga, ambicioso peninsular (como alcalde de primer voto presidía el Cabildo) quien emergió de la jornada como nueva figura dominante, la posición de Liniers pronto quedó consolidada porque la corona lo nombró interinamente Virrey. Esto marca el fin de la cooperación

durante la cual Liniers y los capitulares no sólo derrotaron a dos invasiones sino que pasaron por alto y socavaron la autoridad del Virrey Sobremonte a la vez que reducían a la orgullosa Audiencia al triste papel de tener que encontrar fórmulas jurídicas para reconciliar las decisiones revolucionarias de los nuevos líderes locales con el marco de referencia institucional ya existente.

Después de confirmarse el nombramiento de Liniers por la Corona, la burocracia más alta comenzó a acercarse al nuevo representante de la autoridad monárquica, quien a su vez estaba muy dispuesto a olvidar su anterior hostilidad. Estos limbos inesperados fueron vistos con malos ojos por el Cabildo y marcan el comienzo de una complicada lucha por el poder local en la cual la organización militar urbana, fuente de tanto orgullo para Liniers y los capitulares, comenzó a ser considerada con cada vez mayor desconfianza por estos últimos. Contando con el apoyo pasivo de la burocracia, la Audiencia y el obispo, Liniers pudo capear un difícil período de transición debido a la crisis dinástica en España. Después de su victoria en Buenos Aires, había ofrecido un tributo público al Emperador de Francia, viendo luego que su fervoroso bonapartismo se transformaba en señal de traición, dados los acontecimientos en Europa. Los capitulares y el gobernador de Montevideo (quien antes de dejar su puesto a otro candidato del nuevo virrey organizó una Junta disidente que volvió a darle su investidura con poder sobre la ciudad y el distrito) se aprovecharon de este giro de los eventos para tratar de restituir su autoridad y lanzaron una campaña injuriosa en la cual la lealtad política, la honestidad administrativa y la moral privada de Liniers recibían un duro ataque.

Este conflicto abrió nuevas posibilidades para las unidades de la milicia urbana. El Cabildo no había prescindido de su apoyo y no parecía atribuir mucha importancia al rol dominante de los criollos. Por el contrario, trató de lograr un mayor apoyo introduciendo después de la elección de 1808 una regla tácita por la cual las candidaturas se repartirían entre 4 peninsulares y 4 criollos cuidadosamente seleccionados. También había nombrado como su representante en Madrid a un rico y popular criollo, don Juan Martín de Pueyrredón, cuyas opiniones políticas heterodoxas eran bien conocidas por todos, incluidos los capitulares. Más importante fue la creciente resistencia de los capitulares al aspecto financiero de la política de militarización de Liniers. La profesionalización de regimientos enteros creó la necesidad de nuevos ingresos del orden de un millón de pesos al año. Según comenta en setiembre de 1808 el Brigadier Manuel José de Goyeneche, en ese momento en Buenos Aires enviado por la Junta de Sevilla:

"Los asuntos militares necesitan un inspector con profundos conocimientos en esta rama para reclutar a los mejores y más distinguidos grupos de las actuales unidades sin forma, para reducir los altos salarios de la tropa y para dejar organizada una fuerza sobre principios militares profesionales, de modo que el Virreinato ofrezca beneficios a la metrópolis y no absorba todos sus recursos para su propia defensa."¹¹

Si bien el Cabildo estaba de acuerdo con este diagnóstico, hasta después que le fracasó el intento de tomar el poder, los capitulares no dieron rienda suelta a su protagonismo contra las milicias urbanas. Tenían sus buenas razones: la ominosa jornada del 1º de enero de 1809, gracias a la decidida acción armada de las unidades criollas con las de andaluces y cantábricos quienes ocuparon la plaza, impidió la caída de Liniers, ya que se estaba gestando un golpe entre capitulares con el apoyo de las milicias vascas, catalanas y gallegas menos numerosas. Esto

muestra con gran claridad dónde se encontraba el poder real en Buenos Aires: Saavedra era omnipotente y las influencias militares criollas y plebeyas iban en aumento para gran desesperación de la base de apoyo local que el virrey siempre había buscado en la cúpula de la burocracia, la Audiencia y el palacio episcopal.

Las autoridades metropolitanas se apresuraron a terminar con estas peligrosas novedades. En lugar de Liniers, demasiado popular, se nombró a un nuevo virrey: Baltasar Hidalgo de Cisneros, experto y capaz oficial naval. Sin embargo Cisneros, apoyado por un gobierno metropolitano debilitado, no pudo hacer gran cosa para cambiar la situación militar en el Río de la Plata. Ni siquiera osó entrar en Buenos Aires hasta no recibir el homenaje de los líderes militares locales, que sólo le fue acordado a cambio de acciones muy precisas por su parte. Así, pues, si bien Cisneros restablecía la milicia peninsular (disuelta en enero) bajo el nuevo apodo de batallones del comercio, no disolvió los regimientos remunerados de criollos. Es cierto que comenzó a debilitar el aparato militar enviando las mejores tropas criollas contra una insurrección criolla en el Alto Perú y más decididamente por el incumplimiento de enrolar a nuevos reclutas. No podía ir muy lejos en esta dirección sin despertar una alarma peligrosa entre los líderes militares criollos. Su primera preocupación frente al ejército urbano no fue la de conseguir entradas suficientes para pagar a oficiales y soldados. Esta administración colonial, asfixiada bajo el peso de un cuerpo militar demasiado grande, fue la que dio en noviembre de 1809 y a regañadientes, la "autorización provisoria" para abrir el comercio con Inglaterra.

Cuando se produjo este hecho, la función militar del ejército urbano ya había sido cuestionada durante algún tiempo. Los peligros excepcionales que Buenos Aires debió enfrentar durante la guerra contra los ingleses se habían desvanecido gracias al cambio de alianzas en 1808. Si bien la disposición pacífica de los portugueses no era del todo confiable, la amenaza que constituían no era nueva y no justificaba preparativos militares tan costosos. La función del ejército debía más bien buscarse ahora en el contexto político de la crisis de poder en España que había comenzado localmente en 1806 y se había expandido hasta envolver a todo el imperio en 1808. La formación de una milicia urbana no sólo había dado a los criollos la fuerza militar que obligaba a todos los contendientes por el poder en Buenos Aires a tomarlos en cuenta: les había dado por primera vez una organización que si bien no era necesariamente hostil, sin embargo era peligrosamente independiente del viejo sistema administrativo y militar que tan bien había protegido a la metrópolis del peligro de caer bajo control de grupos locales. Se formaba así un liderazgo alternativo en la ciudad mientras que los grupos gobernantes tradicionales se veían debilitados por la crisis metropolitana.

En mayo de 1810 la Revolución mostró la fuerza de este nuevo liderazgo y la pérdida de la función gubernamental de los representantes del poder español. Si bien los cambios institucionales locales que siguieron a otra crisis en el gobierno metropolitano fueron impuestos por una fuerza militar, se los introdujo con tan poca oposición, por parte de los niveles más altos de la vieja administración, que pudo emerger un régimen revolucionario sin romper formalmente con la legalidad del antiguo régimen. No es de extrañar que el Coronel Cornelio de Saavedra se hallara al frente del nuevo gobierno. Con su ascenso al poder supremo la victoria del ejército urbano parecía completa. Sin embargo, pese al hecho de que el grupo revolucionario estaba investido de algún tipo de legitimidad formal y solía presentar a sus adversarios como un conjunto de individuos rebeldes contra el Rey y contra el País, la revolución de mayo de 1810 fue en realidad sólo la primera etapa

de una guerra complicada. Dado que la España metropolitana estaba afrontando al mismo tiempo —con poco éxito al principio— su propia guerra de independencia, la guerra en el Río de la Plata fue en esencia una guerra civil. Muy pronto quedó sobreentendido que la victoria militar sería la primera meta del movimiento revolucionario. Así pues se reconoció al ejército como portador de un rol dominante dentro del estado, a la vez que se lo forzó a realizar una transformación completa, porque la milicia urbana creada en 1806 ya no era adecuada para las nuevas demandas que imponía una guerra revolucionaria.

El prestigio cada vez mayor del ejército fue muy marcado como puede verse por el hecho de que la revolución aceptara la militarización de toda la sociedad como un ideal (no realizado a menudo en la práctica, naturalmente) y por la pérdida progresiva de poder y prestigio de los cuerpos administrativos y eclesiásticos después de las rebeliones revolucionarias. La militarización en la vida diaria de la ciudad dio motivos de preocupación, reflejados en el decreto de creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires:

"Los pueblos compran a precio muy subido la gloria de las armas, si el magistrado no empeña su poder y su celo en precaver el funesto término a que progresivamente conduce tan peligroso estado, a la dulzura de las costumbres sucede la ferocidad de un pueblo bárbaro [...] Buenos Aires se halla amenazada de tan terrible suerte; y cuatro años de gloria han minado sordamente la ilustración y virtudes que las produjeron. La necesidad hizo destinar provisoriamente el Colegio de San Carlos para cuartel de tropas; los jóvenes empezaron a gustar una libertad tanto más peligrosa cuanto más agradable, y atraídos por el brillo de las armas que habían producido nuestras glorias, quisieron ser militares, antes de prepararse a ser hombres."¹²

Pero esa prosa apasionada no podía hacer nada para frenar la tendencia impuesta por una guerra en creciente expansión.

Después de la primera serie de derrotas graves del movimiento revolucionario en setiembre de 1811 el gobierno proclamó que "las virtudes guerreras serán el camino de las distinciones, de los honores, de las dignidades... Todos los ciudadanos nacerán soldados y recibirán desde su infancia una educación adecuada a su destino... en fin, todo ciudadano mirará la guerra como un estado natural".¹³ Este ambicioso plan dejaba muy poco lugar para el cultivo de tradiciones gentiles, legado de épocas más pacíficas. En este ambiente bélico, los jefes militares gozaban de una popularidad no comparable con otros políticos revolucionarios. En su vejez, Manuel Antonio Pueyrredón no podía olvidar que la severidad de su padre le había prohibido pasear por las calles vestido, como otros niños porteños, con los colores de la patria y recordaba con cariño el día en que, escapando a la vigilancia paterna, había ido "a cantar a lo de Chiclana, a quien cantaron el siguiente verso: "La espada cortante de nuestro Chiclana, cuando se la pone, tiembla toda España"¹⁴. Cada victoria de las armas se celebraba con elogios hiperbólicos en ceremonias públicas y privadas cuyos recuerdos duraron muchas décadas después de terminadas las guerras revolucionarias, mientras un público irónico contemplaba el destino de funcionarios del gobierno alguna vez poderosos y respetados, luego caídos a menudo en desgracia.

El ascenso de los militares tomó nuevas dimensiones cuando comenzó a justificarse en términos de doctrina revolucionaria. De manera similar la pérdida de prestigio de la burocracia, que fue en

suma un reflejo de la inestabilidad posterior a la revolución, se aceleró y acentuó por el desarrollo de los objetivos revolucionarios más generales. Sin embargo la incompatibilidad entre los ideales de la revolución y la posición privilegiada de la burocracia más alta no fue reconocida inmediatamente. Al principio la hostilidad abierta era dirigida sólo contra un pequeño grupo de funcionarios realistas cuya oposición a la revolución se reconocía abiertamente y consideraba como un justificativo más para la revolución misma. Estos funcionarios orgullosos y egoístas no defendían los derechos del rey, sino sus propios privilegios injustos.¹⁵ Destituirlos fue un acto de necesidad política y también de justicia, ya que abrió nuevas y mejores perspectivas para los criollos más patrióticos y meritorios. Así lo declara el nuevo Cabildo de Buenos Aires, nombrado en octubre de 1810 después de separar a sus elementos hostiles: "La Patria ha expulsado a una serie de individuos de su seno, pero también descubre que su lugar no quedará desocupado".¹⁶ También lo dice la Gaceta, después de la pacificación de Córdoba: "No se advierte ya más diferencia que haber pasado a manos de hijos del mismo Córdoba aquellos empleos que los anteriores funcionarios habían profanado".¹⁷ ¿Se trataba pues de los mismos puestos? ¿Seguían teniendo el mismo prestigio y el mismo poder que en épocas más calmas? Son muchas las causas que hacen pensar que no era tal el caso. El régimen revolucionario no podía compartir el poder necesario para afrontar las luchas internas y externas con organismos burocráticos orgullosos de su larga tradición de competencia con organismos rivales. Este orgullo era inaceptable para la nueva generación de funcionarios revolucionarios que debían ajustarse a nuevos criterios éticos y políticos, no olvidando jamás que su poder emanaba del que le había investido el pueblo. Cuando el nuevo régimen reemplazó a los soberbios oidores por abogados criollos del fuero porteño, los nuevos jueces recibieron un salario mucho más modesto. También se les quitó la insignia que el antiguo orden confería a la función, y la simplicidad de la ceremonia de asunción era subrayada deliberadamente.¹⁸ Hasta las autoridades más altas del estado trataron de adaptar sus modalidades al nuevo ideal y espontáneamente se despojaron de la pompa y del ceremonial "que por desgracia le la humanidad inventaron los tiranos para sofocar los sentimientos de la naturaleza".¹⁹

Mientras la administración civil era despojada de su "prestigio funesto" e invitada a ganar el apoyo de los ciudadanos a través de méritos más sólidos, el gobierno revolucionario se ocupaba de la reforma de los uniformes militares, sin hacer concesiones al espíritu de simplicidad republicana que imponía a los funcionarios civiles. La posición privilegiada de los militares en el estado fue la única excepción confesada a la nueva igualdad entre gobernantes y gobernados. Era, por supuesto, una consecuencia de la guerra, pero también tenía algo que ver con las modificaciones en el equilibrio del poder político que se produjo en Buenos Aires con la creación del régimen revolucionario. Lo mismo se aplica a las reformas en la organización interna del ejército, consecuencia de la amplia resistencia al movimiento revolucionario: el ejército reformado no sólo podía hacer frente a los desafíos de una guerra regular, estaba también mejor preparado para desempeñar un nuevo papel político en la revolución.

Después de tomar el poder, la Junta dedicó más y más atención a los problemas de organización dentro del arma. Las unidades urbanas, cuya organización seguía siendo la de cuerpos voluntarios (si bien se acercaba a un ejército regular en muchas cuestiones de finanzas y disciplina) se transformaron ahora en regimientos veteranos, y numerosos destacamentos fueron enviados al interior como fuerzas expedicionarias. Paralelamente, se creó una nueva milicia urbana, ejercitada y reclutada según pautas de organización anteriores, a 1806 para llenar el vacío dejado por el traslado continuo de los regimientos veteranos. Los cuerpos cívicos debían "defender la capital en

caso de invasión por enemigos a la felicidad del país"; pero no estaban solos en esta misión.²⁰ Una reducida fuerza de veteranos fue asignada para proteger a la ciudad Contra peligros internos y externos. Al mismo tiempo se trataba de dar alguna formación profesional a los futuros oficiales. En octubre de 1810 la Junta impuso a todos los cadetes la obligación de asistir a la Escuela de Matemáticas, donde se enseñaban los principios de la artillería.²¹ Esta decisión se presenta como un apartamiento total de la tradición colonial que daba categoría de oficiales a quienes no lo merecían y a veces hasta a los hijos menores de edad de oficiales del ejército. También prometía abrir el cuerpo a soldados, cabos y sargentos sobresalientes, aunque poco se cambió en este sentido. La promoción de personal de tropa fue bastante poco usual en este período revolucionario, y la distancia entre oficiales y soldados fue mayor en el ejército, posterior a 1810, que en las unidades urbanas creadas en 1806.²²

Esta nueva disciplina militar creó resentimientos entre los veteranos de 1806 y 1807 que estaban acostumbrados a una conducción menos severa. En noviembre de 1811 la derrota de la rebelión de patricios, seguida por la relegación del regimiento desde el primero al quinto lugar en el ejército, puso un triste fin, a la militarización urbana abierta cinco años antes. Aún antes de esa crisis final el ejército urbano ya estaba declinando. Las guerras revolucionarias requerían un tipo de reclutamiento menos estrictamente local y la junta ordenó a la expedición militar al Norte que "en todo pueblo donde se entre se hará una revista formal de toda la tropa... se harán reclutas rigurosas, cuidando de que recaigan en hombres de buena talla que se remitirán a la capital".²³ Así se recurría a una nueva fuente de recursos humanos y se invertía la política seguida hasta 1806. El uso de medidas compulsivas en la búsqueda de reclutas rurales afectó hondamente la relación entre los oficiales y sus hombres, como así también la actitud de la población rural hacia los ejércitos revolucionarios. Debido a los métodos de reclutamiento y a los rigores de la vida militar, las deserciones se convirtieron en un problema importante después de 1810. En su campaña al norte, Belgrano elegía deliberadamente lugares para acampar en los cuales la deserción resultara azarosa. Señalaba melancólicamente que el ejército patriota encontraba a su paso "frialidad, total indiferencia y, diré más, odio mortal de toda la población".²⁴

Sin embargo, el empleo de reclutamientos en el campo no alivió la presión sobre los habitantes de Buenos Aires. Apenas la mitad de los soldados concentrados en la ciudad en marzo de 1810 se encontraban allí a fines de año. Con poco más de mil soldados no se podía enfrentar la amenaza de Montevideo, en poder de los realistas, y la necesidad de nuevas tropas para las fuerzas expedicionarias que se enviaban al Interior. El reclutamiento urbano debía continuar, y con la perspectiva de una larga guerra que tendría como escenario campos de batalla lejanos, consideraciones de tipo económico y político favorecieron la adopción de nuevos criterios. No sólo los funcionarios públicos, sino también los hombres ocupados en las "artes útiles" fueron eximidos del servicio militar y las presiones se dirigieron hacia una población marginal bastante numerosa de vagos y malentretidos ya asignados al ejército por los viejos reglamentos coloniales, cuyo cumplimiento no se había puesto rigurosamente en vigor.²⁵

Otra fuente de reclutamiento urbano la dieron los esclavos.

No sin desconfianza por parte de los grupos gobernantes, hasta los negros no emancipados habían recibido armas en 1807 y su valor y lealtad hacia sus amos había sido objeto de grandes elogios. Las donaciones de esclavos destinados al ejército se hizo más frecuente partir de 1810, y

cuando comenzó a flaquear la generosidad de los dueños de esclavos, el gobierno revolucionario comenzó a comprarlos para el ejército. Las ventas a menudo eran forzadas, y dado que el gobierno no estaba demasiado dispuesto a pagar de inmediato las deudas que contraía, podía de este modo adquirir reclutas, siempre y cuando estuviese dispuesto a afrontar la ira de los propietarios de esclavos. Sin embargo, en 1817 este resentimiento fue suficiente para detener el reclutamiento universal de los esclavos. De modo característico, el Director Supremo Pueyrredón se volvió entonces hacia el campo como fuente alternativa de reclutas.²⁶

Con estos pocos espontáneos reclutas rurales, con vagos y esclavos que llenaron los claros de la movilización urbana de 1806, los oficiales ya no eran los intérpretes naturales de la nueva conciencia política de los soldados, como lo habían sido en parte antes de 1810. Las características democráticas en la estructura del arma, que permitían a simples soldados opinar sobre todos los asuntos, fue objeto de grandes críticas. El precio de una mayor eficiencia militar era el retorno a una disciplina más autoritaria y tradicional que podía a veces hacer concesiones al comportamiento turbulento de oficiales tan díscolos como valientes, pero que no iba a demostrar similar flexibilidad frente a la tropa.

Un cambio paralelo se hizo sentir en el cuerpo de oficiales. La importancia dada a la capacitación militar profesional, junto con el traslado de grandes sectores del ejército desde Buenos Aires hacia distantes lugares de combate, fomentó una nueva indiferencia hacia la ciudad y en especial a la vida política urbana²⁷, a la vez que tornaba más sólida la red de solidaridad y rivalidades en los cuarteles. Se introducen así nuevos elementos en la ya complicada trama de lealtades personales y de facciones dentro del grupo gobernante revolucionario. Estos hechos forman parte de un cambio más generalizado: la adopción asombrosamente rápida de pautas militares profesionales por parte de los jóvenes oficiales del ejército revolucionario. Sin duda quienes entre ellos confían más en su heroísmo que en su entrenamiento para lograr la victoria, tratan a la población civil con dureza y hablan de ella tan desdeñosamente como si fuesen ya veteranos de muchas batallas, es probable que estén encaminándose hacia un desastre militar. Pero también están adoptando un modo de comportamiento que les parece adecuado para hombres cuya profesión es el heroísmo. Encontramos la misma actitud, más sutilmente expresada, en un oficial revolucionario que no tenía paciencia para la ostentación de inoportuno heroísmo y la indisciplina constante de sus colegas. Cuando el General José María Paz recuerda sus primeras experiencias en el ejército bajo las órdenes de Belgrano y juzga el desempeño de su ex comandante con la benevolencia algo condescendiente, propia de un profesional que es testigo de los esfuerzos de un aficionado lleno de buenas intenciones, se corre riesgo de perder de vista el hecho de que se trata de las reminiscencias de un hombre que ha entrado sólo recientemente al ejército patriota, renunciando así a un brillante futuro como estudiante de abogacía en Córdoba.²⁸ El puntilloso Paz podía olvidar con tanta facilidad como sus temerarios compañeros de armas que, en honor a la verdad, en 1812 no tenía aún ningún entrenamiento como militar profesional.

No es de extrañar, pues, que los oficiales con más experiencia militar siempre consideraran a ésta una ventaja importante. Los nombres de familias de militares dominantes en el ejército regular anterior a 1806, vuelven a aparecer con mayor frecuencia en los registros posteriores a 1810 que durante los años en que dominó la nueva oficialidad urbana, si bien incluso en esa época los oficiales profesionales estuvieron también presentes. Los Viamonte, el complejo clan de hermanos

y primos Balcarce, Álvarez Thomas, Soler, Pinedo, Quintana, Olavarría, Rodríguez, Vedia, representan así una continuidad entre el cuerpo regular de oficiales de la Colonia y el ejército revolucionario.²⁹ Lejos de constituir una carga en épocas revolucionarias, esa continuidad reflejada en sus apellidos era muy apreciada como garantía de capacidad profesional. En ciertos casos, la carrera revolucionaria de una nueva generación de oficiales se desarrollaba a la par de obstinadas actitudes contrarrevolucionarias en miembros más viejos de la misma familia.³⁰

Dado entonces que la victoria militar se constituía en el primer objetivo del régimen revolucionario, aquellos oficiales regulares que no preferían otorgar su lealtad a los realistas encontraban posibilidades de fácil progreso en el ejército patriota aunque tuviesen algún traspié político o de otra índole en su pasado: aun el modesto entrenamiento militar adquirido en el ejército colonial no era de despreciar. Cuando se lo cuestionaba no era en nombre de pautas políticas más exigentes sino para propugnar un estilo bélico más moderno. En 1812 José de San Martín comenzó a organizar el regimiento de granaderos a caballo sobre el modelo francés, mientras el nuevo texto de tácticas de infantería de Carlos María de Alvear estaba también influido por la escuela francesa. Ambos hombres habían sido ganados recientemente para la causa revolucionaria y los dos venían directamente de España, donde habían interrumpido para ello sus promisorias carreras militares. Ellos forzaron una profesionalización aún más rápida en el ejército, dado que podían ofrecer el conocimiento y la experiencia que el ejército patriota necesitaba desesperadamente, aún después de dos años de lucha revolucionaria.

A fines de 1813 el ejército revolucionario se había reorganizado con pautas menos locales y más profesionales y totalizaba unos 8 mil hombres. Otros seis mil más fueron organizados en milicias locales y distribuidos en todo el territorio. El ejército urbano de 1806-1810 ya no existía. Su reemplazo por una organización más tradicional se justificaba obviamente dado que se había vuelto a una guerra también ella de estilo más tradicional. ¿Qué ocurrió con esas funciones políticas que en la milicia urbana había desempeñado más efectivamente que sus tareas militares posrevolucionarias? El reemplazo de tropas urbanas semivoluntarias por un ejército organizado sobre bases más amplias y más profesionalizado tuvo sin duda consecuencias políticas importantísimas. Debido justamente a que estas consecuencias no se oponían a la tendencia política general en la Argentina revolucionaria, la reforma militar pudo completarse con tanta rapidez y facilidad.

En mayo de 1810 el ejército urbano había sido el alma del movimiento revolucionario, no sólo porque controlaba el poder militar necesario para lograr el asentimiento de las autoridades coloniales al cambio de régimen, sino más aún porque proporcionó el marco organizativo dentro del cual se gestó el partido revolucionario. Sin embargo, la agitación revolucionaria se había extendido desde el principio más allá de los confines del ejército urbano. Durante las jornadas revolucionarias, agitadores populares fueron vistos por las calles de Buenos Aires. Sus seguidores se hicieron oír en momentos cruciales como voceros de las aspiraciones revolucionarias, lo que permitía a los jefes del ejército urbano asignarse un papel de árbitros entre el viejo orden y sus enemigos declarados. La última estocada de los líderes del ejército contra el gobierno colonial tomó la forma de una declaración en que alegaban su incapacidad para controlar la intranquilidad popular. Si bien la declaración pasaba por alto con gran habilidad la coincidencia de opiniones entre agitadores populares y jefes del ejército, la aparición de nuevos actores en la contienda política (por ejemplo en la agitación popular durante las jornadas revolucionarias) era harto real.

Dentro del ejército urbano mismo, surgían lentamente nuevas agrupaciones y liderazgos paralelos a la organización formal existente dentro de los batallones. Si bien hasta el 22 de mayo de 1810, o sea hasta la renuncia del virrey, el ejército urbano funcionaba como dócil herramienta en las manos de sus jefes, en los confusos días que siguieron a la creación de una Junta encabezada por el ex virrey es más difícil descubrir dónde se hallaba la iniciativa política. Cuando emerge el 25 de mayo una nueva junta presidida por Saavedra pero con algunos de sus antiguos enemigos entre sus integrantes, es evidente que las peticiones populares que obligaron al Cabildo a nombrarlos se originaban en los cuarteles del ejército urbano.³¹ Sin embargo, la composición de la nueva Junta muestra que la iniciativa no podía haber surgido exclusivamente de los jefes más importantes del ejército.

De esta manera, la revolución de mayo de 1810 fue al mismo tiempo la victoria final del ejército urbano y el comienzo de una crisis de su influencia política. Seguiría siendo el núcleo básico del apoyo popular al nuevo régimen revolucionario, pero a la par iba emergiendo ya otro apoyo popular más nuevo y todavía no organizado. La agitación que se extendía entre sectores cada vez más amplios de la población debilitaría la solidez del apoyo que las unidades habían prestado a sus líderes armados antes de mayo de 1810. El gobierno revolucionario afrontó este nuevo problema ampliando el ejército, cuando French, el más exitoso de los agitadores de la jornada de mayo, fue nombrado coronel de un nuevo regimiento. Pero esta solución creaba otros peligros: las diferencias latentes entre los militares y los seguidores civiles del régimen revolucionario se introdujeron dentro del ejército mismo cuya cohesión política declinó en consecuencia.

Más importante aún es que los revolucionarios ya no eran una facción ambiciosa de hombres nuevos que luchaban por el poder: ahora estaban en el poder. Para enfrentar sus nuevas tareas no podían perder el control y además debían ofrecer liderazgo político a un número mucho mayor de gente del que podía abarcar un ejército urbano. El régimen revolucionario no tenía empacho en usar para este fin los instrumentos dejados por el régimen anterior. Trató de movilizar a la Iglesia para que lo apoyara, obligando a los sacerdotes a dar sermones sobre las ventajas del nuevo orden político.³² Usó también en medida creciente a la policía y a los burócratas menores de la administración judicial controlada por el Cabildo. Después de la reorganización del Cabildo en octubre de 1810 y del nombramiento de nuevos hombres en el puesto de alcaldes y tenientes alcaldes tanto en la ciudad como en el campo, se les dio mayor autoridad sobre la libertad y propiedad de los habitantes de su distrito. Dado que las tensiones políticas iban rápidamente en aumento como resultado de amenazas contrarrevolucionarias, la Junta debió confiar cada vez más en sus representantes locales, si bien éstos eran a menudo acusados de actos despóticos. Así se los puso a cargo de la búsqueda de armas no declaradas y se les permitió imponer castigos muy severos a quienes las escondían.³³ Su autorización pasaba a ser necesaria para mudarse de un barrio a otro, incluso dentro de los límites de la ciudad, y en sus funciones podían exigir la colaboración de cualquier vecino y castigarlo si la ayuda no era recibida de inmediato. A medida que crecían las tensiones políticas, estos amplios poderes fueron interpretados con mayor flexibilidad y las quejas de las víctimas (sospechosos políticos por definición) cayeron en oídos sordos.

Esta red de autoridades locales con poderes cada vez mayores pasó a constituir un filtro entre el ejército y sus potenciales reclutas. El servicio voluntario era suplantado por la conscripción de vagos, y los alcaldes y tenientes eran los encargados de determinar quiénes lo eran y de este modo

incorporarlos a filas. De esta y de otras maneras, las organizaciones policiales adquirieron un grado de ejecutividad mucho mayor del que alcanzaron durante la movilización político-militar de 1806-1807 y de aquella otra que caracterizó a la movilización política anterior al derrocamiento del régimen colonial en 1810. Los alcaldes y tenientes no eran un mero cuerpo de funcionarios ajenos a la sociedad urbana y suburbana impuestos a ella por el gobierno central. Eran elegidos entre los notables locales, ya que los mejores candidatos eran en teoría aquellos que podían aguardar el orden y cumplir sus funciones con un mínimo de apoyo desde lo alto, pues contaban con sólidas bases en los distritos que controlaban. El hecho de que el sistema policial tuviera elementos de representación local lo hacía potencialmente peligroso al gobierno central, pero lo mismo hubiera ocurrido con una estructura más autoritaria y centralizada e incluso sí el sentimiento político popular hubiese sido menos intenso: los agentes locales tendían a sucumbir a la tentación de usar sus poderes relativamente independientes no para servir sino para presionar al gobierno central.

Estos peligros se descubrieron de prisa y se eliminaron más de prisa aún. El rápido aumento del poder de los alcaldes fue facilitado por conflictos dentro del gobierno revolucionario, que ya eran evidentes en el último mes de 1810. El secretario de la Junta, Mariano Moreno, adherente reciente del grupo revolucionario y antiguo partidario de Alzaga, se convirtió en cabeza de la facción que favorecía una política radical contra los enemigos del movimiento, mientras que Cornelio de Saavedra, sintiendo que perdía terreno, se identificaba gradualmente con tácticas más moderadas. El conflicto estalló en noviembre-diciembre de 1810. Moreno aprovechó un incidente menor para relevar a Saavedra del supremo comando militar, que revirtió sobre toda la Junta. Saavedra dirigió un contraataque exitoso que consistió en forzar a la Junta a incorporar los diputados electos en ciudades y pueblos del Virreinato, quienes eran en su mayoría hostiles al grupo de Moreno. Este acató la decisión de la Junta y se apartó de ella para cumplir una misión diplomática en Gran Bretaña (sucumbiendo a una muerte prematura en alta mar), pero sus seguidores mantuvieron influencia dentro del gobierno y la adhesión de los revolucionarios más militantes. En marzo de 1811 ya se estaban reorganizando en el marco de la Sociedad Patriótica que se reunía en uno de los cafés de la ciudad. El desarrollo poco satisfactorio de la guerra y la adopción por los moderados de las mismas políticas que antes habían denunciado como jacobinas, dieron nuevo ímpetu a la facción recientemente derrotada. Al mismo tiempo los amigos de Saavedra comenzaron a dudar de su dominio sobre el ejército. En un clima de crisis inminente, los morenistas formaron una alianza con el Cabildo y organizaron una campaña contra el proyecto de deportar a los peninsulares solteros (considerados los más probables opositores a la revolución ya que no tenían familia ni afincamiento en el país). La Junta se rindió ante la presión de la Sociedad y del Cabildo y se declaró complacida al descubrir que sus propios sentimientos humanitarios eran tan ampliamente compartidos por los patriotas porteños.³⁴

La influencia de Saavedra, junto con la de los diputados de las provincias, había comenzado a declinar: el ascenso al poder de la facción rival, más coherente y decidida, era sólo cuestión de tiempo. Sin embargo, el nuevo actor entra en el escenario político de Buenos Aires para restablecer el equilibrio trastornado por la audacia de los morenistas. En la noche del 5 al 6 de abril de 1811 una multitud se reunió una vez más en la Plaza Mayor y sitió pacíficamente al Cabildo y a la fortaleza. Como en jornadas revolucionarias anteriores estaban protegidos por algunos militares, entre ellos los fieles oficiales saavedristas del regimiento de patricios. No obstante, el equilibrio entre soldados y civiles había cambiado decididamente. También se produjo

un cambio llamativo en la composición de los grupos de civiles: ellos llegaban a la plaza desde los suburbios de la ciudad, conducidos por sus alcaldes y tenientes, que dirigían abiertamente a los manifestantes y hacían peticiones en su nombre. La Junta otra vez se doblegó a razones de fuerza mayor y adoptó casi todas las medidas incluidas en el petitorio popular. La misma mayoría saavedrista en la Junta recordaría más tarde con vergüenza cómo había sido en esa ocasión salvada por la plebe. La jornada había producido en efecto demasiadas novedades inaceptables para los jefes políticos y los grupos establecidos. La petición exigía medidas más severas contra los peninsulares: la población criolla de los suburbios no los consideraba —como la elite revolucionaria de la sociedad patriótica— amigos ni compadres; más bien los conocía como codiciosos comerciantes al menudeo y poco generosos acreedores. Tampoco la generosidad recíproca ya usual entre políticos porteños gozaba de la aprobación de la plebe ensoberbecida, que pedía la supresión de las pensiones e indemnizaciones pecuniarias que tenían fuesen otorgadas a quienes se proponían apartar del gobierno.

La clara perspectiva sociopolítica de los nuevos grupos que se habían hecho oír el 5 de abril, fue causa de verdadera alarma para la Junta. La solidaridad creada por la movilización militar de 1806 a 1810, en la que grandes sectores de la población criolla pobre y marginal se habían organizado bajo el liderazgo de la elite criolla, había agotado sus posibilidades. Su reemplazo por un nuevo alineamiento de aún más amplios sectores populares implicaba un nuevo período de inestabilidad política, ya que estos grupos no habían participado activamente en el largo proceso que había creado una opinión pública militante antes de la revolución; e ignoraban o condenaban todo el conjunto de actitudes políticas que esa experiencia común había creado en los jefes revolucionarios y en sus seguidores. Más inquietante aún era que esta población recientemente movilizada de los suburbios no estaba comprometida ni personal ni ideológicamente con los jefes de la elite revolucionaria: la decisión de apoyar a Saavedra en contra de los morenistas fue tomada por los alcaldes y no por sus disciplinados seguidores. Podía así surgir un nuevo elenco gobernante que reuniese a esas notabilidades de barrio cuya capacidad de acción política había sido subestimada hasta ese momento. No es difícil comprender por qué este movimiento fue rápidamente frenado. Muy pronto toda la policía pasó a depender del control directo del gobierno central, y los puestos de alcaldes y tenientes se hicieron renovables cada año.

Una consecuencia indirecta pero muy significativa de los acontecimientos de abril de 1811 fue la rápida profesionalización del ejército. La experiencia política de ese momento había demostrado que el ejército urbano ya no tenía control sobre la creciente movilización política de la plebe de Buenos Aires; que la militarización misma y las reacciones ante ella comenzaban a hacer trastabillar la hegemonía política de la elite criolla y que la creación de un ejército profesional bajo el control de un cuerpo de oficiales surgido de la elite era no sólo esencial para proseguir con la guerra revolucionaria sino de suma utilidad para resolver de modo favorable a esa elite los conflictos internos y políticos de la revolución misma. No es de extrañar pues que, a la vez que emerge un ejército profesional a partir de los restos de las unidades urbanas, el poder revolucionario adquiere rasgos cada vez más oligárquicos. A pesar de su ideología radicalizada, la Sociedad Patriótica es precursora de esta tendencia: su objetivo no era el de movilizar nuevos grupos en apoyo de la revolución sino divulgar nuevas ideas dentro de sectores ya movilizados. Pero aun la Sociedad Patriótica fue paulatinamente perdiendo importancia. El papel político decisivo pasó a manos de la Logia, sociedad secreta que había tomado abiertamente el poder después del golpe militar de octubre de 1812. Así, el nuevo

ejército consolidaba el movimiento político que había comenzado poco después de los hechos de abril. La Logia agrupaba y disciplinaba con la mayor eficacia posible al pequeño grupo que ahora ejercía el poder político y militar en la Argentina revolucionaria. Su creación había sido consecuencia y causa a la vez de un estrechamiento del orbe político porteño y de una creciente coherencia interna del grupo gobernante.

El nuevo ejército redefinía su papel político en ese nuevo marco, e iba a consolidar un proceso político de signo opuesto al que en su momento había sido hecho posible por la formación de la primera milicia urbana. El ejército no tuvo sin embargo éxito total en el desempeño de sus nuevas funciones. Entre octubre de 1812 y mediados de 1815, fue sin duda el pilar fundamental del régimen revolucionario en su lucha a la vez contra los realistas, los disidentes federales del Litoral y la oposición en la ciudad misma. Pero su apoyo al régimen resultaba extremadamente costoso, y no sólo en términos de dinero. Al utilizar al ejército como instrumento político por excelencia, el gobierno revolucionario transformaba en costumbre el uso de la fuerza para solucionar sus problemas internos, perpetuando de esta manera las contradicciones políticas que precisamente estaba tratando de suprimir. Al mismo tiempo, el uso indiscriminado del ejército imponía una fuerte carga económica sobre la población de las áreas revolucionarias. El descontento derivado de ello se tradujo en un círculo vicioso, tanto más peligroso dado que las poderosas clases altas de Buenos Aires debían soportar toda la carga del costo de la guerra, y la impopularidad de la dirección revolucionaria se extendió hasta a aquellos grupos sociales de los cuales ella había emergido. El gobierno militar fue visto en la opinión popular (no sin razón) como el responsable de una carga impositiva cada vez más pesada, y los resentimientos comenzaron a acumularse. El resentimiento aumentó también por la violencia cotidiana, alimentada por las exigencias de la guerra y de las disputas internas, además de la arrogancia de los militares que con frecuencia actuaban con total arbitrariedad, mostrando poco respeto por edad o rango.³⁵

El gobierno de la elite revolucionaria sufrió así aislamiento progresivo frente a los grupos sociales que la habían llevado al poder en los años 1806-1810, enajenándose incluso aquellos mismos a los que pertenecía. Después del desmoronamiento de la estructura política revolucionaria en 1815, la reconstrucción se hizo sobre bases muy distintas. Se condenó abiertamente al extremismo revolucionario, y el nuevo sistema buscó sin vacilaciones su apoyo político entre los grupos adinerados de la sociedad. Al mismo tiempo, el gobierno dirigió su "preocupación paterna"³⁶ (la expresión misma tenía un sabor de ancien-régime no del todo inoportuno) al bienestar de los pobres y necesitados, esperando así ganar apoyo popular. No tuvo éxito en ello; los moderados no eran favorecidos por las clases plebeyas, y ciertos líderes militares que se habían identificado con el odiado régimen de 1811-1815 empezaron a ganar nueva popularidad como jefes políticos de esa oposición latente.

Cabe preguntarse por qué las clases plebeyas en la ciudad fueron tan sordas a quienes apelaban a su propio interés en contar con un gobierno ordenado y menores gastos militares. Podría ser que la militarización más que una carga les resultara una bendición. Como medio para lograr una redistribución del poder político el nuevo ejército había primero fomentado y luego desalentado una ampliación de la base social de éste. Pero en lo que se refiere a la redistribución de ingresos, durante ambas etapas había trabajado en una sola dirección, transfiriendo riqueza de los grupos sociales más elevados a los más bajos. Como puede verse en las cifras de la Caja de Buenos

Aires, que rápidamente se estaba convirtiendo en la Tesorería de la Argentina revolucionaria, el costo de la guerra se volcaba predominantemente en pagos de sueldos al ejército.³⁷ Aun si se descontaran otros efectos laterales (aunque no insignificantes) de la militarización tales como las ventajas otorgadas a los artesanos libres al absorber un creciente número de esclavos en el ejército, que disminuía la amenaza económica que ellos representaban, o bien el surgimiento de un nuevo mercado de productos artesanales constituido por el ejército mismo, la militarización había creado ocho mil puestos rentados contando sólo a los soldados. La suma total que se les pagaba variaba de un año al otro pero generalmente excedía el millón de pesos. La carga fiscal se enjugaba con nuevos derechos de importación y exportación o bien con contribuciones extraordinarias. Sólo la primera de éstas afectaba a la masa de la población, pero estaba más que contrabalanceada por los beneficios que el consumidor gozaba gracias al comercio libre otorgado por primera vez en 1809 y expandido por los sucesivos gobiernos revolucionarios. Por otra parte, los derechos de exportación y las contribuciones extraordinarias sólo se imponían a los ricos. Por ello es más fácil comprender las causas de la lealtad a la auténtica tradición revolucionaria y republicana, y de la popularidad de las guerras de liberación, notas dominantes de la opinión política plebeya, en Buenos Aires en la etapa posrevolucionaria, que coincide con la nostalgia de la época de hegemonía militar y guerras ofensivas que domina a los jefes militares desplazados en los años de 1816 a 1820. Si la organización interna y el papel político del ejército sufrieron cambios fundamentales después de 1810, pese a ello seguía siendo cierto, como lo habían señalado los opositores a Liniers en 1809 que quienes conformaban ese ejército viven "de las erogaciones que han aniquilado el erario... cuando podrían ocupar sus brazos en las artes, y hacer que progresara la industria". Es comprensible que las opiniones de aquellos que se beneficiaron con este aspecto de la militarización hayan diferido substancialmente de la de aquellos que debieron afrontar su desmesurado costo.

Notas

1 Mariquita Sánchez, Recuerdos del Buenos Aires virreynal (Buenos Aires, 1953), pág. 61. Como excepción citaremos a Francisco Sagui, para quien las carreras obvias que podía elegir un hijo de "familia decente" y "raza pura española" eran la Iglesia, las leyes, la medicina y el ejército. Coronel Francisco Sagui, "Apuntes de familia", Senado de la Nación (Biblioteca de Mayo, Buenos Aires, 1960), III, pág. 2191. Sin embargo, se observa que aquello que según Sagui es una carrera en el ejército, al final resulta ser un puesto en la marina mercante.

2 Ejemplos de las últimas décadas del siglo XVIII pueden verse en: Enrique Udaondo, Diccionario biográfico argentino (Buenos Aires, 1938) págs. 752 y sig., págs. 834 y sig. Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, Hombres de Mayo (Buenos Aires, 1961), págs. 53, 204, 281, 290. Archivo General de la Nación Argentina, Tomas de razón de despachos militares, cédulas de premio, retiros, empleos civiles y eclesiásticos, donativos... 1740 a 1821 (Buenos Aires, 1925), pág. 468.

3 Por ejemplo, entre otros, Fermín Rodríguez, capitán, comandante de Chascomús e importante estanciero: Hombres de Mayo, pág. 312.

4 Sobre este tema véase John Lynch, "Intendants and Cabildos in the Viceroyalty of the Rio de la Plata.", *Hispanic Amer. Hist. Rev.*, XXXV (1955), págs. 337-62.

5 Francisco Sagui, "Los últimos cuatro años de la dominación española en el antiguo virreinato del Río de la Plata", Senado de la Nación, op. cit., I, págs. 45, y sigs.

6 "Tercio de voluntarios de Galicia. Estado que manifiesta la fuerza efectiva que tiene hoy día de la fecha el expresado tercio" firmado Pedro Antonio de Cerviño y Ramón Manuel de Pazos, 21 de noviembre de 1806: Documentos para la Historia Argentina, XII (Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires, 1919), págs. 322-3.

7 Manuel Belgrano, Autobiografía en Escritos económicos publicado por G. Weinberg (Buenos Aires, 1954), pág. 53.

8 Memorándum del Cabildo de Buenos Aires, 15 de octubre de 1808 Mayo Documental, VI (Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires, 1962, pág. 334; memorial de los ex capitulares de Buenos Aires, 24 de febrero de 1809, ibid. VIII, pág. 52; Diego Ponce de León al Conde de ridablanca, Montevideo, 10 de febrero de 1809, ibid., VIII, pág. 11.

9 Juan Manuel Beruti, "Memorias curiosas", Biblioteca de Mayo, IV, pág. 3815; para los criterios aristocráticos de Beruti (morenista), Saavedra era un "mero vecino pobre".

10 La mejor presentación de la estructura social de Buenos Aires de los últimos años de la Colonia es la de Manfred Kossok, El virreynato del Río de la Plata. Su estructura económica-social (Buenos Aires, 1959). Un análisis más estadístico también es factible, como lo prueba José Luis Moreno en "La estructura social y demográfica de la ciudad de Buenos Aires en el año 1778", Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas, VIII (Universidad Nacional del Litoral, Rosario, 1965).

11 Informe confidencial de J. M. Goyeneche a la Suprema Junta de Sevilla, Buenos Aires, 14 de setiembre de 1808, Mayo Documental, III, pág. 74,

12 Gaceta de Buenos Aires, 13 de setiembre de 1810, pág. 238.

13 Resolución de la Junta, 6 de setiembre de 1811, Registro Nacional, I (Buenos Aires, 1879), pág. 117.

14 Manuel Antonio Pueyrredón, Memorias (Buenos Aires, 1942), págs. 5-6.

15 Las invectivas contra los "mandones" fueron lugares comunes de la propaganda revolucionaria. Ejemplo típico es la proclama del Coronel Ortiz de Ocampo a la población de Córdoba: "...los defensores de la libertad de los pueblos que osadamente invocan el nombre de nuestro Augusto Soberano el Señor Don Fernando VII para encubrir su hidrófica sed de dominar" han sometido a su "yugo feroz" a una ciudad que no merece "tener a su cabeza a unos que sólo consultan su fortuna". Gaceta, 2 de agosto de 1810.

16 Gaceta, 23 de octubre de 1810, pág. 7.

17 Ibid., 17 de setiembre de 1810, pág. 5.

18 Ibid., 23 de junio de 1810, pág. 55.

19 Decreto que suprime los honores presidenciales, Mariano Moreno, Doctrina Democrática (Buenos Aires, 1915), pág. 231.

20 Decreto del 18 de setiembre de 1812, Registro Nacional, I, pág. 179.

21 Decreto del 19 de octubre de 1810, *ibid.*, págs. 79-80.

22 La carrera de cada uno de los soldados y oficiales se encuentra registrada en Tomas de razón (citado en la nota 2).

23 Adolfo P. Carranza, Archivo General de la República Argentina. Período de la Independencia, año 1810, 2a. serie, I (Buenos Aires, 1894), pág. 6.

24 Museo Mitre, Documentos del Archivo de Belgrano, IV (Buenos Aires, 1914), págs. 109, 118.

25 Proclama del 29 de mayo de 1810, Registro Nacional, I, pág. 28. La protección de la población económicamente activa es evidente por ejemplo, en la resolución del 21 de agosto de 1810, *ibid.*, que explícitamente prohíbe la conscripción de peones que trabajen en actividades de transporte y en general de "toda persona que en cualquier capacidad sirva al público".

26 Pueyrredón a San Martín, cartas del 9 de octubre de 1816, en Carlos A. Pueyrredón, La Campaña de los Andes (Buenos Aires, 1942, facsímil); 52º decreto del 19 de septiembre de 1816 en Gaceta del 25 de septiembre; su revocación el 9 de octubre en *ibid.*, 12 de octubre de 1816.

27 Esta tendencia es denunciada en la Gaceta, 17 de octubre de 1811 por "un patriota que merece el nombre de serlo".

28 General José María Paz, Memorias póstumas (Buenos Aires, 1954), I, págs. 22-3.

29 Véanse los trabajos citados anteriormente en la nota 2.

30 Tal el caso del futuro general Agustín de Pinedo (capitán en 1811, sargento mayor en 1814, comandante en 1815 y coronel en 1819) cuyo padre y tocayo había escapado a Montevideo después de la revolución: Tomas de razón, págs. 691-2; y para el general Hilarión de la Quintana cuyo padre, brigadier desde 1802, se había opuesto a la Revolución; Hombres de Mayo, págs. 290-1.

31 Prueba convincente de lo antedicho se encuentra entre otros, en el estudio de Roberto Marfany, El pronunciamiento de Mayo (Buenos Aires, 1968).

32 Nota de la Junta al obispo de Buenos Aires, 21 de noviembre de 1810, Registro Nacional, I, pág. 89.

33 Decreto del 31 de julio de 1810, *ibid.*, pág. 47.

34 Gaceta, 28 de marzo de 1811, págs. 621-36.

35 Muchos ejemplos pueden encontrarse en Beruti, Memorias Curiosas, págs. 3868-9, 3879 y siguientes.

36 Bando del 27 de agosto de 1817 sobre la escasez de trigo y harina en Gaceta del 29 de agosto de 1817.

37 Cf. las series Libro Mayor de Caja (Archivo General de la Nación, Buenos Aires).